

TEMES

Prensa y política en el tardofranquismo (1962-1975). La rebelión de las élites

Juan Francisco Fuentes

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Cambio económico y crisis política

«De 1962 a 1982 se produjeron los cambios más rápidos y profundos que España haya experimentado desde la caída del Antiguo Régimen y el advenimiento de la sociedad liberal». ¹ Estas palabras de Santos Juliá no sólo sirven para calibrar la magnitud del gran cambio histórico producido en esas dos décadas, sino también para resaltar la profunda conexión existente entre la evolución social y política del país y la función dinamizadora desempeñada por un sector de la prensa española de la época, principalmente los semanarios de opinión. Los veinte años en los que Juliá enmarca ese proceso corresponden en concreto a la última y más importante etapa de la revista *Triunfo*, que se convierte en 1962 en un semanario político comprometido, tras casi dos décadas como revista especializada en el mundo del espectáculo, y que desaparece significativamente justo veinte años después, en vísperas de la victoria electoral del PSOE. La coincidencia podría hacerse extensiva al semanario

¹ S. JULIÁ, «España en tiempos de *Triunfo*», en A. ALTED y P. AUBERT (eds.), «*Triunfo*» en su época, Madrid, La Casa de Velázquez, 1995, p. 28.

Cuadernos para el Diálogo, creado en 1963 y cuyo último número vio la luz en 1978, en plena transición. Parecida importancia podría atribuirse al cambio empresarial y editorial que vivieron en los años sesenta algunos periódicos y semanarios de información general, como *Madrid, Informaciones, El Correo Catalán* y *Mundo*, estos dos últimos en Barcelona. El primero de ellos pasó de ser un periódico anodino y languideciente, fruto del expolio periodístico de la Guerra Civil, a convertirse en la punta de lanza de una operación politicomediática que contaba con el apoyo de un grupo financiero e ideológico cercano al Opus Dei. El momento clave para esa transformación fue el nombramiento, en 1966, de Rafael Calvo Serer como presidente del consejo de administración y de Antonio Fontán como director del diario.

Algo similar sucedió con el viejo *Informaciones*, convertido en enero de 1968 en un rejuvenecido órgano de opinión al servicio de un grupo empresarial, Prensa Castellana, S.A., participado por los principales bancos españoles (Central, Banesto, Vizcaya, March y Santander), que propició un insospechado giro editorial e informativo del periódico hacia posiciones críticas con el régimen. La llegada de Manuel Ibáñez Escofet, en 1964, a la dirección de *El Correo Catalán*, controlado por un grupo de empresarios del sector textil, tuvo parecidas consecuencias en este diario, tradicionalmente vinculado al carlismo catalán. Finalmente, las iniciativas empresariales protagonizadas por el financiero barcelonés Sebastián Auger, empezando por la compra de *Mundo* en 1967, siguiendo con la aventura de *Tele-Express* y terminando en un intento postrero de reflotar el periódico *Informaciones*, pueden verse como una muestra más de la fruición mediática experimentada por algunas relevantes personalidades que, como en los casos de Auger o Calvo Serer, estaban directamente vinculadas al Opus Dei o a su entorno.

En los cambios registrados por el sector de los medios de comunicación intervino de forma decisiva el contexto histórico de los años sesenta, del que se derivaron un conjunto de factores que, en mayor o menor medida, influyeron en la aparición de las publicaciones antes citadas o en un giro radical en su trayectoria. Así, por ejemplo, la importancia del Concilio Vaticano II en la apertura del catolicismo español a una nueva realidad resultó determinante en el nacimiento de *Cuadernos para el*

Diálogo (1963), en la evolución de la revista *El Ciervo*, creada en 1951 por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (en adelante, ACNP) de Barcelona, en la postura cada vez más beligerante de la revista *Hechos y dichos*, de la Compañía de Jesús —una de las publicaciones más perseguidas por el régimen en los años sesenta—, o en la consolidación en Cataluña de la revista *Serra d'Or* como un referente politicocultural de la más variada oposición al franquismo. El comienzo de ese ciclo apuntado por Santos Juliá coincide asimismo con la llegada de Manuel Fraga Iribarne al Ministerio de Información y Turismo y la puesta en marcha de una nueva política informativa sin la cual, y pese a sus evidentes limitaciones, difícilmente hubiera podido desarrollarse una prensa cada vez más crítica y plural.

Mayor importancia tuvieron aún los cambios sociales y culturales impulsados por el desarrollo económico iniciado con el Plan de Estabilización de 1959: crecimiento urbano, secularización, aumento del nivel de vida, fuerte incremento de la población universitaria, conflictividad social y aparición de una opinión pública ansiosa por disponer de unos medios de información más fiables que la propaganda oficial. La principal novedad aportada por Manuel Fraga a la política informativa del franquismo consistió, precisamente, en adecuar la doctrina y la legislación del régimen a esa nueva realidad, mediante una especie de transacción entre los deseos crecientes de libertad de la opinión pública y las necesidades políticas de la dictadura. Lo dijo el propio Fraga en plena gestación de la Ley de Prensa de 1966: «*Nosotros tenemos que decir que progresivamente tratamos de establecer una libertad informativa acorde con el nivel del tiempo*», pues, a su juicio, resultaba evidente que «*los cambios operados en la estructura social española ha[bía]n dado lugar a una opinión pública más dinámica*».² La creación por el gobierno, en 1964, del Instituto de la Opinión Pública —origen del actual Centro de Investigaciones Sociológicas— muestra esa misma conciencia de la magnitud del cambio que se estaba produciendo en la sociedad española y que obligaba al régimen a adaptarse a él mediante la paulatina sustitución de una política informativa basada en la censura y en las consignas por otra algo más sutil que otorgaba una

² M. FERNÁNDEZ AREAL, *La libertad de prensa en España, 1938-1971*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1971, p. 70.

creciente importancia a procedimientos como las encuestas de opinión o como el uso del teléfono para presionar a los directores de los medios, en una época en que estos últimos ya no eran nombrados por el gobierno. La incorporación al lenguaje oficial del concepto de opinión pública, proscrito durante mucho tiempo y sustituido por el de *opinión nacional*, indicaba como la aceptación resignada de unas nuevas reglas del juego que venían impuestas por la propia realidad social y cultural y que el sector más pragmático de la dictadura acataba por puro realismo.

Lo mismo podría decirse de ciertos círculos de poder financieros, sociales y académicos, situados en la órbita del régimen, que desde los años cincuenta venían tomando posiciones en el sector de los medios de comunicación, principalmente en la prensa escrita, pero también en la radio y en las agencias de noticias. El lanzamiento en 1952 del semanario *La Actualidad Española*, afín al Opus Dei y dirigido durante algunos años por Antonio Fontán, futuro director del *Madrid*, y la creación de la agencia Europa Press en 1957, también por gente del Opus, y de la COPE en 1960 son algunos de los hitos de esa intervención creciente en los medios de comunicación de ciertos grupos de poder más o menos en la sombra — Opus Dei, ACNP, gran banca, élites tecnocráticas y funcionariales... En la nueva coyuntura social y política de los años sesenta, la prensa tendrá un doble valor estratégico; en primer lugar, porque en el modelo de vida occidental hacia el que España se encaminaba los medios desempeñaban un papel esencial en la creación de estados de opinión y en la toma de decisiones; en segundo lugar, porque el deterioro de la salud de Franco, la eventualidad de su muerte —el *hecho biológico*, en el lenguaje franquista— y la cuestión sucesoria planteaban a medio plazo un horizonte ineludible de lucha por el poder entre las llamadas *familias del régimen*, ante el cual parecía aconsejable estar bien situado en el aparato del Estado y, por si ello no fuera suficiente, disponer de una cierta capacidad de movilización de la opinión pública. La crisis de gobierno de 1969, provocada por el *caso Matesa*, sería la demostración más palmaria tanto de la ferocidad que había alcanzado la lucha por el poder como de la importancia que algunas familias del régimen atribuían a la prensa adicta en la creación de un clima político favorable a sus tesis. Otra cosa era que Franco se dejara condicionar por la audaz campaña de opinión promovida en el verano de

1969 por algunos ministros falangistas o afines —José Solís Ruiz y Manuel Fraga— contra sus adversarios del Opus Dei, directamente salpicados por el caso *Matesa*. El procedimiento resultaba hasta tal punto contrario a la naturaleza personalista de la dictadura y a la mentalidad autocrática del dictador, que la crisis de gobierno de 1969 se saldó, paradójicamente, con una victoria aplastante de los tecnócratas y la defenestración política de quienes habían destapado el *affaire*.

Hay, en todo caso, una lógica profunda en los movimientos que, desde tiempo atrás, venían realizando ciertos grupos de poder en el ámbito de los medios de comunicación, empezando por la iniciativa impulsada en los años cincuenta por Rafael Calvo Serer y secundada por algunas personalidades políticas y altos funcionarios del Opus Dei de crear una «tercera fuerza nacional», en un intento de acabar con el duopolio *de facto* que el régimen había supuestamente concedido a falangistas y propagandistas de la ACNP, los dos principales centros de extracción durante mucho tiempo, junto con las Fuerzas Armadas, de los cuadros políticos del régimen. El primer paso de la opción liderada por Calvo Serer, que se vio notablemente reforzada con la llegada de los tecnócratas al gobierno en 1957, fue la fundación de Europa Press ese mismo año. Le siguió, cuatro años después, la creación de la FACES (Fomento de Actividades Culturales, Económicas y Sociales), una plataforma de difícil catalogación de la que formaban parte diversas personalidades del mundo católico y conservador, como Gonzalo Fernández de la Mora —futuro ministro de Obras Públicas—, Florentino Pérez Embid y el propio Calvo Serer. Fue este último quien, con ayuda del banquero Luis Valls Taberner —miembro también del Opus Dei—, convirtió la FACES en el instrumento financiero y societario que permitió a Calvo y a su grupo hacerse en 1966 con el control del diario *Madrid*.³ Esta irrupción en la prensa escrita del capital privado, procedente en buena parte de la gran banca, era tanto más llamativa cuanto que desde 1939 la titularidad de la inmensa mayoría de los periódicos españoles correspondía al Estado, propietario del medio centenar de cabeceras de la Prensa del Movimiento, a la Iglesia, a través de la Editorial

³ Sobre todo ello, véase el libro de R. CALVO SERER, *La dictadura de los franquistas. El affaire del «Madrid» y el futuro político*, París, 1973, especialmente vol. I, pp. XVI-XVIII.

Católica, o, como mucho, a empresas privadas de carácter familiar, como las sociedades editoras de *La Vanguardia* y *ABC*.

El caso del periódico *Madrid* plantea varios fenómenos de especial importancia para entender la compleja relación entre élites, prensa y poder en la fase final del franquismo. El primero es el protagonismo que destacados miembros de los cuerpos de élite de la Administración tuvieron en este complicado proceso, en el que se combinan un deseo de apertura política, distintos proyectos de modernización social y económica, intereses corporativos y lucha por el poder, siempre con el apoyo, en un segundo plano, de determinados círculos financieros —el Banco Popular en el caso del *Madrid*— o de altas personalidades del régimen. Conviene recordar, por ejemplo, que los dos artífices del nuevo *Madrid* eran catedráticos de universidad, lo mismo que Joaquín Ruiz-Jiménez, fundador de *Cuadernos para el Diálogo*. Fue frecuente, asimismo, que en estos medios de comunicación, de nueva creación o recientemente reconvertidos, se superpusieran en una estructura piramidal tres instancias de poder y de gestión no precisamente coincidentes en sus postulados políticos e informativos: la empresa editorial, controlada, como hemos visto, por grupos más bien conservadores; la dirección, desempeñada por personalidades relativamente liberales con buenas conexiones sociales y empresariales —los hermanos de la Serna, en el caso de *Informaciones*—, y el equipo redactor, nutrido por jóvenes periodistas a menudo próximos a la oposición antifranquista. Como consecuencia de lo anterior, en algunos casos se produjo un progresivo desajuste entre los fines, generalmente moderados, perseguidos por los empresarios y banqueros que financiaban estas aventuras politicomediáticas y la vertiginosa dinámica opositora en la que, de forma impremeditada y empujados por las circunstancias, entraron estos medios de comunicación hasta llegar a una colisión frontal con el régimen. Tanto en el diario *Madrid* como, posteriormente, en *Informaciones*, ese conflicto terminó cuando el sector mayoritario del accionariado decidió, bajo fuertes presiones gubernamentales, liquidar la empresa o imponer un cambio radical en la redacción. La dependencia financiera respecto a personas o empresas más o menos conservadoras se producía también en algunas revistas y semanarios de opinión, como la revista *Triunfo*, participada por la empresa de publicidad Movierecord, fuertemente

endeudada, a su vez, con el Banco Atlántico, próximo al Opus Dei, lo que estuvo a punto de provocar la desaparición de la revista en 1969.⁴ Pero, en general, al tratarse de productos más baratos y de empresas más modestas, los semanarios disfrutaron de una autonomía algo mayor que los periódicos más combativos.

¿Una «fronda» de funcionarios?

Merece la pena que nos detengamos un momento en uno de los factores ya señalados: el protagonismo de un sector de la élite funcionarial en la lucha de poder y de ideas que tuvo por escenario la prensa española en los años finales de la dictadura. Autores de toda solvencia han subrayado la progresiva profesionalización del Estado desde finales de los años cincuenta, en un proceso relacionado, sin duda, con la nueva deriva tecnocrática del régimen y con la búsqueda de una mayor eficiencia en su funcionamiento. De ahí la tendencia del Estado franquista a soltar algo de lastre ideológico y a incorporar a ciertas instituciones —especialmente en el ámbito económico, pero no sólo— un personal administrativo cada vez más cualificado y cada vez menos incondicional desde el punto de vista político. «Desde 1960», ha escrito Santos Juliá, «*fue posible llegar con más frecuencia a una posición de alto funcionario sin haber sido cooptado por ninguna de las grandes burocracias fundadoras del régimen*».⁵ Una afirmación que podría ilustrarse con ejemplos tan significativos como el de Miguel Herrero de Miñón, que en 1966 ingresó por oposición en el cuerpo de letrados del Consejo de Estado, «*el Alto Cuerpo*», como, según él, «*se le denominaba y se le denomina*». En la primera parte de sus *Memorias de estío* recuerda lo que aquella época tuvo para él y para otros muchos de aprendizaje de los resortes de la administración y de entrenamiento en el ejercicio del poder, desde un conocimiento en profundidad del aparato del Estado y de un farragoso utillaje teórico adquirido en la preparación de las oposiciones y, posteriormente, en el desempeño de su puesto. «*Si la transición política de los setenta*», afirma Herrero, «*no hubiera sido posible*

⁴ J. Á. EZCURRA, «Apuntes para una historia», en ALTED y AUBERT, «*Triunfo*»..., p. 48.

⁵ J. C. MAINER y S. JULIÁ, *El aprendizaje de la libertad, 1973-1986. La cultura de la transición*, Madrid, Alianza Ed., 2000, p. 27.

sin la estabilización económica de 1959 y el ulterior desarrollo, tampoco lo hubiera sido sin la creación de un moderno sistema jurídico-administrativo en los mismos años. El mismo Consejo de Estado tuvo en esta función un importantísimo papel». ⁶ Una función que desempeñaron también otras instituciones políticas y académicas, que sirvieron como lugar de encuentro entre ciertas élites de poder y ciertas élites opositoras y como cantera de un sector numeroso de la futura clase política de la transición. Destacaron en ese papel el Instituto de Estudios Políticos y algunas cátedras universitarias, sobre todo de Derecho y de Políticas (las de Carlos Ollero, Enrique Tierno Galván, José Antonio Maravall o Manuel Jiménez de Parga, por ejemplo). Este fenómeno, que alcanzó su apogeo a partir de mediados de los años sesenta, se resume en una frase muy gráfica, una especie de consigna apócrifa, que figura en las recientes *Memorias* de Raúl Morodo: «*Siente Vd. un rojo en su cátedra*». ⁷

Mucho más discutible resulta la afirmación de Herrero de Miñón de que el Estado franquista —«*al menos el que yo conocí en la década de los sesenta*»— era un verdadero Estado de derecho, ⁸ e igualmente hay que considerar exagerada su homologación del régimen de Franco con «*el gobierno de los funcionarios*», sobre todo por basarse en un dato más que dudoso: entre 1939 y 1970 el 96 por ciento de los ministros habrían sido, según este autor, funcionarios civiles o militares. ⁹ En la coyuntura crucial

⁶ M. HERRERO DE MIÑÓN, *Memorias de estío*, Madrid, Temas de Hoy, 1993, p. 24.

⁷ R. MORODO, *Atando cabos. Memorias de un conspirador moderado*, Madrid, Taurus, 2001 (la frase citada figura en el Índice como título de un epígrafe del libro).

⁸ HERRERO DE MIÑÓN, *Memorias de estío...*, p. 22.

⁹ HERRERO DE MIÑÓN, *Memorias de estío...*, pp. 22 y 24. Aparte de la incongruencia que supone sumar militares y funcionarios civiles, un análisis mucho más riguroso de la procedencia socioprofesional de los altos cargos del franquismo arroja un 35,91 por ciento de burócratas a lo largo de todo el régimen. Cfr. el exhaustivo libro de Mariano BAENA DEL ALCÁZAR, *Élites y conjuntos de poder en España (1939-1992). Un estudio cuantitativo sobre Parlamento, Gobierno y Administración y gran empresa*, Madrid, Ed. Tecnos, 1999, p. 192 n. No obstante, en el importante epígrafe de «nombramientos por decreto» los «burócratas civiles» alcanzarían un 53,79 por ciento; BAENA DEL ALCÁZAR, *Élites y conjuntos...*, p. 216. Véase también el trabajo de Miguel BELTRÁN VILLALVA, «La Administración Pública y los funcionarios», en el libro dirigido por Salvador Giner, *España. Sociedad y política*,

de los años sesenta, varias cosas parecen, en todo caso, indudables: 1. Que, al calor de un desarrollo económico que giraba en parte en torno al sector público, el Estado había entrado en una fase expansiva, patente en el imparable aumento de los presupuestos,¹⁰ y al mismo tiempo modernizadora, con incorporación a los altos cuerpos de la Administración de técnicos y funcionarios procedentes de las últimas promociones universitarias; 2. Que un sector de esas nuevas generaciones de altos funcionarios mostró muy pronto una actitud crítica hacia los aspectos más anacrónicos y autoritarios del régimen, impropios, según ellos, de un país en plena modernización; y 3. Que progresivamente se fue produciendo un deslinde entre los campos de actuación y de influencia del Estado y del régimen,¹¹ origen de una doble legitimidad —o «autolegitimidad»— en conflicto y de un violento choque de intereses entre unas élites estatales emergentes y los sectores más politizados y fundamentalistas del Movimiento Nacional. Un conflicto agravado, según Alejandro Nieto, hacia 1970, momento en torno al cual se aprecia un descenso significativo de los cuerpos más elitistas de la Administración civil del Estado entre los altos cargos del régimen —del 90 por ciento al 70 por ciento entre 1965 y 1971—, en beneficio de las familias políticas del franquismo, que se aprestaban a una dura lucha por el poder.¹²

La relativa tolerancia gubernamental, de la que carecían los partidos y las asociaciones políticas, hizo de la prensa el principal vehículo de expresión del espíritu de fronda de unas élites funcionariales y tecnocráticas que se sintieron, primero, protagonistas de la modernización y luego parcialmente desposeídas de su influencia en el régimen. El propio Herrero de Miñón cuenta cómo en 1969 un puñado de amigos, todos ellos jóvenes profesionales, decidió crear un «*grupo de vocación política*» que, con el

Madrid, Espasa-Calpe, 1990, con porcentajes superiores a los que ofrece Mariano Baena: alrededor del 80 por ciento de los cargos públicos del franquismo fueron cubiertos, según Miguel Beltrán, por funcionarios civiles, lo mismo que el 30 por ciento de los procuradores en Cortes y el 50 por ciento de los consejeros nacionales del Movimiento (pp. 326-327).

¹⁰ El gasto público pasó de representar el 10 por ciento de la renta nacional a más del 20 por ciento en 1975.

¹¹ Sobre esta cuestión, cfr. el artículo de José CASANOVA, «Las enseñanzas de la transición democrática en España», en *Ayer*, núm. 15, 1994, pp. 15-53.

¹² M. BELTRÁN VILLALVA, «La Administración Pública...», pp. 328-329.

nombre de «*Juan Ruiz*», empezó a publicar semanalmente un artículo de opinión en las páginas del periódico *Madrid*, donde Herrero y sus amigos contaban con el apoyo y la amistad de su director, Antonio Fontán. Se trataba de artículos sobre la actualidad política concebidos no sólo desde una ideología liberal, sino —subraya Herrero— desde «una buena dosis de competencia técnica». En alguna ocasión pretendieron llevar más allá de la letra impresa su lucha contra las arbitrariedades gubernamentales. Así, un miembro del grupo propuso organizar una expedición de protesta al coto de caza en el que el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, tenía previsto cazar un urogallo, entonces en pleno período de apareamiento. El ministro, según Herrero, movilizó a la Guardia Civil de la zona para impedir el boicot de aquellos jóvenes airados, que acabaron siendo detenidos, aunque finalmente consiguieron su objetivo de promover una reforma legal que protegiera al urogallo en celo.¹³ Esta anécdota cinegética, contada por Herrero de Miñón como una pequeña hazaña de su grupo, demuestra la facilidad con la que el compromiso político de las élites reformistas, incluso en su versión más moderada e ingenua, podía chocar con la arbitrariedad y el autoritarismo del régimen. Pero vendría a corroborar también una teoría suya mucho más difícil de compartir: la receptividad del Estado franquista —calificado por Herrero, como vimos, de «*verdadero Estado de derecho*»— a todo aquello que contribuyera a su perfeccionamiento jurídico-administrativo.

Entre el poder y la oposición: los casos de *Ya* y *Cuadernos para el Diálogo*

Mucha más trascendencia que el pequeño cenáculo al que alude Herrero en sus *Memorias* tuvo la actuación del grupo «Tácito» en las páginas del periódico *Ya* desde la publicación de su primer artículo en junio de 1973 hasta su última colaboración aparecida en febrero de 1977, en plena transición.¹⁴ En los miembros de «Tácito» coinciden varios rasgos

¹³ HERRERO DE MIÑÓN, *Memorias de estío...*, p. 48.

¹⁴ Sobre el grupo «Tácito», remito al trabajo de Charles POWELL «The 'Tácito' Group and the Transition to Democracy, 1973-1977», en F. LANDON y P. PRESTON (eds.), *Elites and Power in Twentieth-Century Spain. Essays in Honour of Sir Raymond Carr*, Oxford, Clarendon Press-Oxford University Press, 1990, pp. 249-

biográficos y políticos de gran importancia, como su pertenencia a la ACNP, su relativa juventud —casi todos habían nacido en los años treinta—, su alta cualificación académica y profesional y, en el futuro, la participación de la mayoría de ellos en los gobiernos de Adolfo Suárez y su integración en el sector democristiano de UCD. Entre los fundadores de «Tácito» predominan los altos funcionarios que ingresaron en sus respectivas carreras en los años sesenta, según una trayectoria vital, profesional y política similar a la de Miguel Herrero. Había diplomáticos, como Marcelino Oreja y Rafael Arias Salgado; letrados del Consejo de Estado, como Landelino Lavilla y Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, y abogados del Estado, como Alfonso Osorio, José Manuel Otero y Eduardo Carriles. No faltaban tampoco los profesionales liberales que, sin ser funcionarios de carrera, estaban vinculados indirectamente al Estado a través de las empresas públicas en las que trabajaban como altos ejecutivos. En conjunto, «Tácito» presenta un discurso político y un microcosmos social muy representativo de esa prudente movilización del alto funcionariado en pro de la apertura política, en contraste con la composición de otra publicación emblemática de la prensa más reformista: el semanario *Cambio16*, fundado en 1971 con un espíritu marcadamente liberal por un grupo de dieciséis personalidades procedentes, en su mayor parte, del mundo empresarial.¹⁵

Afirma Charles Powell que la idea de publicar semanalmente un artículo de prensa tuvo mucho que ver con la sensación de involución política que se produjo a partir de 1973, coincidiendo con el nombramiento como presidente del gobierno de Carrero Blanco, tras la llamada «primavera política» de 1972, en la que algunos vieron el preámbulo a una definitiva liberalización de las reglas del juego político.¹⁶ En todo caso, el

268. Los datos que ofrezco a continuación proceden, en su mayoría, de este pormenorizado trabajo.

¹⁵ De los dieciséis, seis eran empresarios y tres economistas, además de un abogado, un catedrático, un profesor, un funcionario y un abogado del Estado; de los otros dos, se desconoce su origen socioprofesional (cfr. el libro de Antonio ALFÉREZ, *Cuarto poder en España. La Prensa desde la Ley Fraga*, Barcelona, Plaza & Janés, 1986, pp. 205-206).

¹⁶ POWELL, «The 'Tácito' Group...», p. 254.

proyecto que se fue esbozando en las colaboraciones periodísticas de «Tácito» apuntaba claramente a una reforma del sistema desde dentro, en la que, por lo demás, venían trabajando ya aquellos componentes del grupo que, como Alfonso Osorio, ostentaban cargos públicos en el segundo o tercer nivel de la Administración franquista. A estos últimos se refería seguramente una fuente anónima que, muchos años después, atribuyó el éxito de UCD en la transición, frente al fracaso de Alianza Popular, a que «UCD se constituyó con los que fueron subsecretarios con Franco», mientras que AP fue creada, como es sabido, por varios ex ministros de la dictadura.¹⁷ Para aquellos funcionarios reformistas convertidos en columnistas del *Ya* los síntomas de bunkerización que ofrecía el régimen en su última etapa resultaban especialmente preocupantes, porque ponían de manifiesto las dificultades cada vez mayores de una reforma política para la que, poco a poco, se iba acabando el tiempo. Se explica así la actitud de «semi-oposición», como la llama Powell, adoptada por ellos en esta época y las respetuosas advertencias lanzadas al gobierno tanto desde los editoriales de *Ya* como desde la columna semanal de «Tácito»: «Ya no podrá haber otra apertura», era el inquietante título de un editorial del 12 de mayo de 1974, cuando, tres meses después del discurso aperturista pronunciado por Arias Navarro el 12 de febrero, el gobierno había agotado buena parte de su credibilidad reformista. En palabras de un colaborador del periódico católico, el problema era que, si el gobierno continuaba en su línea intransigente, la reforma «ya no podría hacerla este régimen ni otro nacido de él».¹⁸ Se sobreentiende que en caso de frustrarse la reforma, y ante la imposibilidad de mantener un franquismo sin Franco, la iniciativa política pasaría a la oposición, con los riesgos que ello comportaba a los ojos del periódico de la Editorial Católica.

Si hasta la muerte de Franco —o, más probablemente, hasta la dimisión de Arias Navarro unos meses después— «Tácito» fue el principal laboratorio político de una estrategia reformista, a partir del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno en julio de 1976 el grupo

¹⁷ Citado en «25 años del 15-J», suplemento de *El País*, 15 de junio de 2002, p. 27.

¹⁸ Textos reproducidos por J. M. GARCÍA ESCUDERO en «Ya». *Medio siglo de historia (1935-1985)*, Madrid, BAC, 1984, pp. 24 y 204.

se convirtió en una inagotable cantera de cargos públicos. No menos de siete de los veinte ministros del primer gobierno de Suárez —el llamado «gobierno de *penenes*»— pertenecían o habían pertenecido a «Tácito».¹⁹ Su influencia no dejó de crecer desde entonces hasta la crisis de UCD en 1980-1982, forzada en gran medida por las discrepancias del sector demócrata-cristiano del partido, controlado por ex *tácitos*, con una línea política que, supuestamente, se había escorado demasiado hacia la izquierda en educación, política económica y política exterior, una reacción que ya en 1977 había anticipado con su dimisión el vicepresidente del gobierno Alfonso Osorio, uno de los fundadores de «Tácito» y mano derecha de Suárez al principio de la transición. Pero hasta la ruptura del partido, los antiguos columnistas de *Ya* tuvieron una aportación decisiva en la creación de UCD y en la propia reforma política, principalmente porque su filiación democristiana les otorgaba una identidad ideológica de la que el partido suarista estaba muy necesitado, sobre todo en su proyección fuera de España, y porque la competencia técnica y, especialmente, jurídica de los *tácitos* resultaba fundamental para el éxito de la estrategia legalista por la que había optado Suárez. Su presencia en las instituciones refleja fielmente el protagonismo que tuvieron en la política española de estos años. Doce miembros de «Tácito» serían elegidos diputados por UCD en las elecciones de 1977, año de la disolución del grupo, y otros tres fueron designados senadores por el rey. A «Tácito» pertenecía también el último alcalde de Madrid nombrado por el gobierno, José Luis Álvarez. La segunda legislatura democrática, y última de mayoría centrista, marcó sin duda el cenit de su influencia política: hasta veinticinco antiguos miembros del colectivo fueron elegidos diputados en 1979.²⁰ Para solemnizar su protagonismo en la nueva vida parlamentaria española, tanto en la primera como en la segunda legislatura democrática, el Congreso de los Diputados tuvo como presidente a un antiguo *tácito*: Fernando Álvarez de Miranda en 1977 y Landelino Lavilla —ministro de Justicia del primer gobierno de Suárez— en 1979. En fin, el propio Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del gobierno tras la dimisión de Suárez en 1981, era un miembro histórico del grupo.

¹⁹ POWELL, «The 'Tácito' Group...», p. 265 y n.

²⁰ POWELL, «The 'Tácito' Group...», p. 267 n.

Se ha dicho que en la plenitud de «Tácito» como grupo de opinión sus artículos en *Ya*, reproducidos por otras cabeceras de la prensa católica, pudieron alcanzar una difusión aproximada de medio millón de ejemplares diarios.²¹ Con ser esto importante, no lo es menos su impacto selectivo en una parte del público tradicional del periódico formada por grupos profesionales, institucionales o ideológicos —altos funcionarios, militares, católicos de estricta observancia— cuya pertenencia al aparato de poder o al llamado «franquismo sociológico» les confería un papel clave, por acción o por omisión, en un eventual desmantelamiento del sistema. Mentalizar a esas élites de poder sobre la necesidad de una —como mínimo— reforma del régimen sería una contribución no desdeñable de «Tácito» a la viabilidad de un proyecto reformista plagado de incertidumbres.

El origen y la trayectoria del semanario *Cuadernos para el Diálogo* ofrece elementos coincidentes con el caso anterior. Fundado en 1963 y dirigido inicialmente por el ex ministro de Educación Joaquín Ruiz-Jiménez —una disposición legal le impidió muy pronto figurar como director—, *Cuadernos* se inscribe, como vimos más arriba, en la estela aperturista del catolicismo posconciliar y en el ámbito difuso de una renovada democracia cristiana, mucho más progresista, en todo caso, que la línea oficialista representada por *Ya*. Por su marcado tono ensayístico, con cierta predilección por los enfoques sociológicos sobre la realidad, y por su postura decididamente partidaria del cambio político, que sólo en 1968 le costó dos multas, un expediente y un secuestro, *Cuadernos* se sitúa en una línea comparable a la de la revista *Triunfo*, con algunas diferencias más o menos sutiles: el componente católico de la cabecera fundada por Ruiz-Jiménez —aunque el mundo posconciliar tuvo en *Triunfo* un representante muy cualificado en el teólogo E. Miret Magdalena—, un mayor pluralismo político e ideológico aportado por las diversas sensibilidades cristianas que recogía en sus páginas —lo que llegó a provocar una escisión de los democristianos más ortodoxos— y un aire grave y académico frente al sesgo más periodístico y al tono costumbrista y ligeramente frívolo de algunas célebres «firmas» de *Triunfo*, que nunca rompió del todo con sus orígenes de revista de actualidad consagrada al mundo del espectáculo y

²¹ POWELL, «The 'Tácito' Group...», p. 252.

que prestó especial atención a la revolución sexual y a la crisis de la sociedad tradicional de los años sesenta.

En el caso de *Cuadernos para el Diálogo* y de la editorial del mismo nombre, como en el de otras publicaciones similares, conviene distinguir entre el limitado alcance social de la revista y su poderosa influencia en unas élites universitarias en plena formación, vinculadas a *Cuadernos* como público lector y a cuyas inquietudes fueron muy receptivas las páginas de la revista. En su nutrida nómina de colaboradores abundaban intelectuales, profesores y jóvenes profesionales que oscilaban entre un catolicismo liberal —Eugenio Nasarre, Juan Luis Cebrián, el padre José María Llanos, el propio Ruiz-Jiménez— y un socialismo humanista —Pablo Castellano, Ignacio Sotelo, Gregorio Peces-Barba, Elías Díaz, Tierno Galván, Raúl Morodo—, pasando por antiguos falangistas desencantados, como Dionisio Ridruejo, José Luis López Aranguren o Pedro Laín Entralgo, y por algunos representantes de la oposición pura y dura. De la influencia y el prestigio de *Cuadernos* entre los sectores más inquietos y comprometidos de las nuevas generaciones puede dar una idea el testimonio personal de Joaquín Almunia, futuro secretario general del PSOE, que recuerda en sus *Memorias políticas* el valor iniciático que tuvo para él la lectura, a los dieciséis años, de uno de los primeros números de *Cuadernos*: «*Me lo proporcionó*», cuenta Almunia, «*el padre Mendibelzúa. En sus páginas encontré argumentos que me ayudaban a ordenar el torbellino de ideas que, de forma confusa, empezaban a bullir en mi cabeza. Al aprobar el Preu, conseguí que mi padre me diese algún dinero para suscribirme a la revista, y su lectura me acompañó durante todo el período universitario*».²²

Por lo demás, *Cuadernos para el Diálogo* fue, como el diario *Ya*, un importante vivero de la futura clase política de la transición. Según Pedro Altares, director del semanario en los años sesenta, hasta ciento cincuenta parlamentarios de las primeras Cortes democráticas habían estado vinculados a la revista.²³ El dato, merecedor de una verificación caso por caso, porque parece formulado con el típico impresionismo periodístico, plantea varias cuestiones de gran importancia, empezando por una notable

²² J. ALMUNIA, *Memorias políticas*, Madrid, Ed. Aguilar, 2001, pp. 32-33.

²³ A. ALFÉREZ, *Cuarto poder...*, p. 91.

paradoja: que el éxito electoral de muchos antiguos colaboradores de *Cuadernos* coincidiera con el rotundo fracaso de la opción política liderada por Ruiz-Jiménez, que se presentó a las elecciones de 1977 al frente de una extraña y heterogénea coalición demócrata-cristiana más o menos de izquierdas, que no contaba ni con el favor de la jerarquía católica ni, naturalmente, con el del gobierno. Por otra parte, la nutrida presencia en las Cortes constituyentes de antiguos colaboradores de *Cuadernos*, elegidos en las listas de UCD, del PSOE, del PSP de Tierno Galván e incluso del PCE, viene a demostrar el alto grado de transversalidad ideológica de la publicación, en contraste con *Triunfo*, que tenía una adscripción política, en la órbita del PCE, mucho más estricta que *Cuadernos*. De todo lo cual parece deducirse que la verdadera proyección social de los semanarios y de algunos periódicos del tardofranquismo debe medirse no tanto por el número de lectores —la difusión de *Triunfo*, por ejemplo, era mayor que la de *Cuadernos*—²⁴ como por su capacidad para conectar con unas élites intelectuales y tecnocráticas surgidas al calor del desarrollo económico y social de los años sesenta y llamadas a tener un protagonismo decisivo en la etapa política posterior.

Conclusiones

Tal podría ser la primera conclusión de este trabajo: que la modesta tirada de los periódicos y semanarios analizados no debe llevarnos a infravalorar la importancia de un sector de la prensa española que luchó denodadamente en los últimos años de la dictadura para crear, a medias con una sociedad en plena ebullición, una opinión pública progresivamente emancipada de la propaganda oficial. La prensa se convirtió de esta forma en eso que alguien llamó «el parlamento de papel», célebre autodefinición no exenta de cierto narcisismo, pero que respondía al hecho incuestionable de que los medios más críticos e independientes permitían representar a una precaria voluntad popular que no tenía otro cauce de expresión. Claro que la representatividad de ese «parlamento de papel» era muy relativa, porque

²⁴ A mediados de los sesenta, *Triunfo* tenía una tirada de unos 65.000 ejemplares, mientras que, en sus mejores momentos, parece que *Cuadernos* no llegó a superar los 50.000 ejemplares.

respondía a una especie de lógica censitaria impuesta por las limitaciones políticas, sociales y culturales del país, que, como en los sistemas electorales demimónícos, restringían *de facto* la categoría de *ciudadano activo*, reservada en este caso al ciudadano plenamente consciente de sus derechos y dispuesto a ejercerlo, una categoría imaginaria en la que, en los años sesenta, podríamos incluir a ciertos sectores de las élites intelectuales, de las clases medias profesionales y funcionariales, de la juventud universitaria y de la clase trabajadora. En todo caso, no se puede negar que lo del «parlamento de papel» tuvo mucho de feliz profecía autocumplida, si damos crédito a las cifras que hemos manejado sobre el número de redactores y colaboradores de publicaciones como *Cuadernos para el Diálogo*, *Madrid*, *Ya* o *Triunfo* que acabaron siendo diputados o senadores en las Cortes democráticas.

Si algún día se inventarían los «lugares de memoria» de la transición española se comprobaría la existencia de una épica y una simbología democráticas estrechamente ligadas al protagonismo de la prensa en la lucha final contra el franquismo y en los momentos críticos de la propia transición. Entre estos últimos cabe destacar la legalización del PCE, fraguada en una larga conversación, a principios de 1977, entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo en el domicilio particular de José Mario Armero, director de la agencia Europa Press y artífice de aquel encuentro, que se desarrolló, como no podía ser menos, dados los protagonistas, en medio del espeso humo de varias cajetillas de ducados, un elemento ambiental que, naturalmente, no podía faltar en la narración televisiva de Victoria Prego para acabar de convertir aquel momento culminante de la transición en un verdadero *thriller* político. El reconocimiento de los servicios prestados por la prensa a la democracia española se formalizó también en gestos institucionales de la máxima resonancia, como la elección de Antonio Fontán, director del *Madrid* en sus tiempos heroicos, como presidente del Senado en 1977, y en pequeños guiños a la memoria colectiva de la población, como aquella escena de la película *¡Viva la clase media!*, especie de elegía antifranquista rodada por González Sinde en 1980, en que una pareja de novios, ambos militantes del PCE, recibe como regalo de bodas una suscripción a *Triunfo*.²⁵ Era un

²⁵ J. C. MAINER y S. JULIÁ, *El aprendizaje...*, p. 209.

pequeño homenaje a una revista emblemática, ya en el tramo final de su existencia, y una evocación de la capacidad de la prensa de aquella época no sólo de impregnar la conciencia política de sus lectores, sino de crear en torno a ella todo un universo de identidades y sentimientos.

Y es que, a falta de otros mecanismos de representación de la realidad del país, algunos medios de comunicación aprovecharon los resquicios de la legalidad franquista, más permisivo en este ámbito que en cualquier otro, para sacar de la clandestinidad al pluralismo real de la sociedad española, desmintiendo así el monolitismo ideológico oficial y el mito del indiferentismo político de los españoles creado por el régimen. No era, de todas formas, la primera vez que la prensa actuaba como avanzadilla de un cambio de régimen finalmente consumado. El viejo argumento reaccionario del «motín de prensa» —esto es, la deslegitimación de un cambio político, generalmente de signo liberal-progresista, atribuyéndolo a los intereses bastardos de un puñado de periódicos— tiene su origen en la misma lógica histórica, a saber: que, en ausencia de libertades, la oposición periodística se ha beneficiado tradicionalmente de un marco legal más tolerante que la oposición política organizada a través de los partidos. «*Esta revolución*», dirá Gil Robles en 1931, en clara alusión al 14 de abril de 1931, «*la han hecho unos cuantos periódicos de izquierda*». Su correligionario Ángel Herrera apostillaba, por su parte: «*Una gran parte de la revolución ha sido fruto de la Prensa*».²⁶

El paralelismo entre los orígenes de la II República y la última transición democrática podría hacerse extensivo a la destacada participación de las élites culturales y funcionariales en el cambio político, canalizada en 1931 principalmente a través de la Agrupación al Servicio de la República fundada por Ortega y Gasset, una iniciativa irrepetible en lo que tuvo de «partido de los intelectuales», tal vez por su corta vida y por la sensación de fracaso que dejó en sus promotores,²⁷ aunque en el Partido Socialista

²⁶ M. C. SEOANE y M. D. SÁIZ, *Historia del periodismo en España. El siglo xx: 1898-1936*, Madrid, Alianza Ed., 1996, p. 408.

²⁷ Sobre este tema, cfr. la tesis doctoral de Margarita MÁRQUEZ, de próxima publicación, *La Agrupación al Servicio de la República. La acción de los intelectuales en la génesis de un nuevo Estado*, Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense, 2002.

Popular de Enrique Tierno Galván podría verse como un eco romoto de aquel proyecto orteguiano. La transición fue fruto, entre otras muchas cosas que no son tema de este artículo, de la percepción que esas élites intelectuales y tecnocráticas tuvieron de la existencia de un conflicto irresoluble entre el Estado al que servían y un régimen anacrónico cuya continuidad comprometía seriamente su proyecto de modernización del país y hasta su supervivencia como casta funcionarial. De ahí la «sensación de continuidad», como la llama Laura Román, que produce el estudio de las élites politicoadministrativas en los años sesenta y setenta, sin que se aprecie un cambio sustancial en su composición antes y después de 1975.²⁸ Buenos lectores de Ortega y Gasset, más de uno de aquellos cualificados funcionarios debió de acordarse de las palabras escritas por él en 1930 al final de su artículo «El error Berenguer»: «Somos nosotros, y no el régimen mismo; nosotros, gente de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos: ‘¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!’». En 1975, la situación no había llegado todavía a tales extremos, pero la degradación del régimen requería una respuesta rápida.

Podría parecer que esta aproximación a la transición política, al poner el acento en el protagonismo de las élites funcionariales procedentes del franquismo, avala los prejuicios de un cierto sector de la izquierda sobre el origen impuro y pecaminoso de la actual democracia española, cuyo *pecado original* —la evolución gradual y pacífica desde la legalidad franquista hasta la democracia y el papel dirigente de algunos elementos del régimen anterior— explicaría la presunta baja calidad de nuestra vida democrática. Es una interpretación que no comparto en absoluto. En realidad, la teoría *soi-disant* lampedusiana de que cualquier cambio político, por radical que sea, responde siempre a los inconfesables fines del poder y a su asombrosa forma de sucederse a sí mismo —«cambiarlo todo para que todo siga igual»— ha sido utilizada contra regímenes mucho menos sospechosos de ello, como la II República española o la democracia portuguesa surgida de la Revolución de los claveles.²⁹ Es cierto, sin

²⁸ Laura ROMÁN MASEDO, *Funcionarios y función pública en la transición española*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, p. 147.

²⁹ Véase, por ejemplo, el disparatado libro del escritor anarquista S. CÁNOVAS CERVANTES, *Proceso histórico de la Revolución española*, recopilación de artículos

embargo, que en las transiciones políticas del último cuarto del siglo XX, especialmente en las que tuvieron lugar en el Este de Europa tras la caída del muro —tal vez con excepción de Polonia—, un sector de la antigua *nomenklatura* tuvo un papel determinante en la consecución de un cambio pacífico de régimen. En palabras de un especialista en aquellos procesos, «la revolución de terciopelo [en Checoslovaquia] actúa como catalizador para que la dinámica de la élite interna acelere las perspectivas de promoción de las élites que están a la espera dentro de las empresas».³⁰ La teoría de la circulación de las élites tiene, como se ve, un amplio campo en las transiciones políticas, siempre que no derive en una interpretación reduccionista de procesos históricos muy complejos en los que concurren otras motivaciones y otros actores sociales y políticos.

No conviene exagerar, en todo caso, el papel pionero que la transición española desempeñó en lo que Huntington llamó la «tercera ola democratizadora», sobre todo en el Este de Europa, entre otras cosas porque las secuencias del proceso modernizador se desarrollaron en orden inverso: en España, al revés que en los antiguos países comunistas, la liberalización económica precedió al cambio político. Pero no deja de ser curioso que un estrecho colaborador de Gorbachov calificara la *perestroika* como una «revolución de los subsecretarios»,³¹ una fórmula muy parecida, como hemos visto, a la que empleó una fuente periodística no revelada al definir recientemente a la vieja UCD: como un partido formado por los subsecretarios del franquismo, a diferencia de Alianza Popular, que fue fundamentalmente un partido de ex ministros. Las razones por las que los subsecretarios —léase altos funcionarios y cargos públicos de segundo nivel— se adaptan tan bien a las transiciones políticas pueden ser muy diversas. Digamos, por lo pronto, que tienen todas las ventajas del poder, como el conocimiento y el manejo de los resortes del Estado, guardando al mismo tiempo una prudente distancia respecto al régimen saliente, lo que no se puede decir, por lo general, de los ministros. No olvidemos tampoco la existencia de un factor generacional que obra a su favor, tanto por el desgaste

publicados en *Solidaridad Obrera* durante la Guerra Civil (Madrid, Júcar, 1978).

³⁰ Richard VINEN, *Europa en fragmentos. Historia del viejo continente en el siglo XX*, Barcelona, Ed. Península, 2002, p. 613.

³¹ Richard VINEN, *Europa en fragmentos...*

político de la generación anterior como por la utilidad que sus virtudes juveniles pueden tener en momentos que requieren soluciones audaces y una alta dosis de voluntarismo e improvisación. Claro está que lo de los «subsecretarios» no hay que tomarlo al pie de la letra, sino como un simple estereotipo con el que caracterizar a unas jóvenes élites politicoadministrativas que, llegado el momento, defendieron desde algunas tribunas periodísticas la necesidad de sacrificar al régimen para salvar al Estado.